

Agenda política, producción de sentido y conflictos sociales en la Argentina. El último año del gobierno de Menem	Titulo
Lorenc Valcarce, Federico - Autor/a	Autor(es)
Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas	En:
Buenos Aires	Lugar
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales	Editorial/Editor
2002	Fecha
	Colección
política; crisis; Conflictos sociales; Carlos Menem; Argentina;	Temas
Capítulo de Libro	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110111065827/3lorenc.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Agenda política, producción de sentido y conflictos sociales en la Argentina

El último año del gobierno de Menem

Federico Lorenc Valcarce*

En las democracias contemporáneas, los procesos de producción de discurso político se organizan temáticamente bajo la forma de una “agenda” que expresa la interacción entre actores políticos, medios de comunicación y sociedad. Esta agenda se vuelve mucho más densa cuando nos acercamos a coyunturas electorales, en las que los políticos profesionales ponen en escena discursos e imágenes –lo que en términos generales suele llamarse “oferta política”¹– orientados a la obtención del apoyo electoral de los ciudadanos. La presente investigación tiene como objetivo central la reconstrucción de los procesos de producción de oferta política en el escenario de la campaña presidencial argentina de 1999 y circunscribe su campo de atención a dos objetos de análisis: en primer lugar, las tomas de posición de los principales actores de la campaña frente a cuestiones socialmente relevantes, tales como el modelo económico, el desempleo y la corrupción; en segundo lugar, las interacciones que subyacen a las tomas de posición de los actores frente a los temas que organizan la agenda política. La información necesaria para reconstruir ambos objetos ha sido generada a partir de la lectura y el análisis de la prensa gráfica de circulación nacional.

¿Quiénes son los actores cuyos comportamientos se analizarán a continuación? Los principales actores de esta campaña electoral fueron: Fernando De la Rúa, candidato de la Alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso, acompañado por el candidato a vicepresidente Carlos Álvarez; Eduardo Duhalde, candidato del gobernante Partido Justicialista, aunque enfrentado con el presidente Menem por el liderazgo interno del peronismo; Domingo Cavallo, antiguo superministro del gobierno de Menem y mentor del Plan de Con-

* Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires. Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente en la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente prepara su tesis sobre “Los partidos políticos argentinos: del Pacto de Olivos a las postrimerías del gobierno de Menem (1993-1999)”, en el marco de la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

vertibilidad², programa económico asociado en la Argentina con la figura casi mágica de la “estabilidad”. En menor medida, el propio Menem participó de la campaña: procurando una segunda reelección mientras la consideró posible y obstaculizando al candidato de su propio partido cuando sus aspiraciones de continuar en la presidencia ya habían sido desbaratadas.

¿Cuáles son los temas alrededor de los cuales se organizaron las interacciones entre estos actores? Por un lado, una serie de cuestiones socialmente relevantes tales como el desempleo, el modelo económico y la corrupción acapararon gran parte de la atención de los enunciadores políticos. Por otro lado, la discusión sobre los intentos reeleccionistas del presidente Menem y la puja con el candidato de su propio partido, Eduardo Duhalde, ocuparon un lugar central en la escena política casi hasta el final de la campaña. Por razones de espacio, me ocuparé de los temas señalados en primer término, puesto que en ellos pueden reconocerse las respuestas –verbalizadas bajo la forma de promesas– de la dirigencia política a las principales demandas de la sociedad.

La competencia democrática y la producción de la palabra política

Dadas las reglas básicas de la democracia representativa, los políticos profesionales tienen a su disposición un repertorio limitado de recursos para procurarse el apoyo de la sociedad. Cualquiera que desee acceder a espacios institucionales de poder político (y mantenerse en ellos), debe contar necesariamente con respaldos externos: algunos de estos respaldos son esencialmente fácticos (gobiernos extranjeros, organismos internacionales, grupos empresarios, medios de comunicación, sindicatos, corporaciones profesionales, Iglesia, burocracia estatal) y otros son más estrictamente institucionales (básicamente, un apoyo mayoritario en las urnas, aunque también puede tener relevancia el sostén orgánico de un partido político). La lucha entre profesionales de la política define una arena competitiva con sus propias reglas y sus propios códigos, reglas y códigos que limitan las posibilidades de acción y discurso de los actores involucrados en este juego. Pero también es evidente que las producciones verbales que acompañan a todas las intervenciones públicas –y especialmente a la política democrática– implican un componente simbólico que va más allá de todo cálculo estratégico y que aparece como síntoma de las ideas dominantes en determinada sociedad en un momento dado de su desarrollo. En este sentido, el análisis de las producciones discursivas de los actores políticos debe indagar simultáneamente dos aspectos del problema: por un lado, la inscripción de las verbalizaciones en un campo político y, por lo tanto, su anclaje en una lucha por el poder que lleva asociados determinados intereses, estrategias y condiciones estructurales; por el otro lado, la inscripción de las mismas verbalizaciones en el universo más amplio que constituyen las concepciones de la sociedad, de la política, de la economía, de la persona humana, etc. que existen en una sociedad y que emergen en la palabra de los políticos profesionales, del mismo modo que podrían aparecer en la palabra de los periodistas, los sacerdotes, los literatos, los académicos o en los más recientes sondeos

de la opinión pública. En este marco, cuando un político toma posición sobre cualquier aspecto de la agenda pública –por ejemplo, sobre el problema de la inseguridad personal o las recetas para reducir la tasa de desempleo– está apostando a ocupar un lugar políticamente redituable en el marco de la lucha entre liderazgos alternativos, pero también –y esto suele ser menos consciente para los propios actores y para los comentaristas de los aspectos superficiales de la política– está expresando algo que está presente en la sociedad o que, al menos, no escapa del universo de lo pensable (es decir, no va más allá del límite de la conciencia posible). Esto puede ser de una relevancia crucial para estudios comparativos o investigaciones de carácter histórico.

Luchando por los votos a través de la palabra

En esta investigación, me interesa indagar el tipo de relación social que se inaugura a partir de la dimensión institucional del apoyo social de los gobiernos democráticos, es decir, la relación entre los políticos en su carácter de agentes que luchan por el apoyo electoral de los ciudadanos y los ciudadanos en tanto agentes que optan electoralmente entre distintas alternativas ofrecidas por el sistema político. Esta relación es ciertamente compleja: aun cuando acotemos el problema a una dimensión institucionalmente definida de la relación entre políticos y ciudadanos (es decir, al escenario electoral en sus variadas ramificaciones), es claro que la compleja trama simbólica a través de la cual se produce este vínculo político –y que suele expresarse sólo de manera abstracta y estandarizada en el voto– presenta un conjunto de dimensiones que no han de abordarse aquí. El comportamiento electoral de los ciudadanos y la legitimidad de los actores políticos pueden sostenerse en determinaciones causales que nada tienen que ver con el juego estrictamente político, y menos aún con las estrategias electorales que los “candidatos” ponen en escena durante las campañas. Pero es justamente esta relación simbólica que los políticos profesionales procuran construir con los “profanos” a través de la palabra lo que constituye el objeto central de esta investigación.

Más allá de toda consideración general, el análisis de la política debe partir de un hecho básico e incontrovertible: los políticos profesionales intentan acceder a los cargos estatales, tanto ejecutivos como legislativos. Para ello necesitan votos, que –según el relato ideológico que sostiene a nuestras instituciones políticas– son la expresión de la soberanía popular propia de las repúblicas democráticas. Para conseguirlos, recurren a la herramienta más típica de la política democrática: la palabra³. De este modo, la competencia democrática es una lucha por la obtención legítima de los cargos, lucha cuyo medio principal es la palabra (Gaxie, 1996; Offerlé, 1997). La palabra política tiene rasgos específicos que la convierten en un género por sí mismo: aun cuando en muchos casos se trate de un discurso impersonal o de un diálogo entre políticos profesionales, es decir, aun cuando no interpele directamente al “ciudadano”, el discurso político tiene como destinatario final al potencial elector. Y, en última instancia, no tiene como fin en sí mismo la persuasión acerca de la corrección de un diagnóstico o la definición de un conjunto de ideales a se-

guir. No se trata solamente de obtener aprobación a lo que se dice, sino que se espera que el interlocutor responda con un comportamiento: el político busca que el ciudadano lo vote. A veces esta intención es manifiesta y urgente, como sucede en tiempos de campaña electoral. Otras veces aparece en un horizonte más o menos lejano.

En este sentido, el conjunto de las acciones y los discursos políticos debe entenderse como una serie de elementos parciales involucrados en un proceso más amplio cuya lógica reside justamente en la disputa por el acceso al timón del Estado. Y es así que los debates sobre temas puntuales no se orientan en función de un marco estrictamente cognoscitivo, sino que se rigen también por cálculos estratégicos y por mecanismos estructurales –no completamente conscientes para los propios actores– de *ajuste entre la oferta política y los estados de conciencia de la sociedad*⁵. A través de la palabra, los políticos profesionales compiten por el apoyo electoral de los ciudadanos. Pero las palabras no son sólo descripciones o explicaciones de un mundo exterior, dado objetivamente y no problemático: las palabras producen realidad y los seres humanos hacen cosas con ellas⁶. Por lo tanto, los discursos políticos son elementos que sólo pueden ser comprendidos en el marco del espacio de competencia entre los profesionales de la política.

La construcción de la agenda a través de la palabra

En el marco de las luchas por el acceso al poder, gran parte de los temas socialmente problematizados son puestos en escena bajo la forma de una “agenda política”⁶. En toda sociedad existe una multiplicidad de temas públicamente problematizables. La publicidad indiscriminada que adquieren cuestiones absolutamente ajenas a los asuntos e intereses colectivos es sólo un caso extremo de trivialización del discurso por parte de algunos espacios comunicacionales masivos. En el otro extremo, es evidente que “ocurren” cientos de hechos más que relevantes –algunos estrictamente “secretos”, otros tan sólo considerados irrelevantes– que no son recogidos por las crónicas periodísticas o por grupos de la sociedad capaces de hacerse oír en el espacio público. Entre un extremo (lo trivial celebrado públicamente) y el otro (lo crucial guardado en la oscuridad), la mayor parte de los temas, sucesos, descripciones, etc. que cobran existencia en los medios llegan a adquirir visibilidad en función de los mecanismos y criterios de selección –asignación de relevancia, jerarquización– propios de los profesionales de la política y la comunicación. Analizar las reglas específicas del campo periodístico, los sistemas de disposiciones de los profesionales que allí operan y los canales que los grupos sociales y políticos tienen para hacerse oír en este espacio, son cuestiones relevantes en todo estudio que se preocupe por la formación de la opinión pública y el lugar que allí ocupan los agentes políticos. Pero lo que más nos importa aquí es el modo en que se opera la selección en el terreno específico de la lucha política: así, por ejemplo, convertir a una ley de privatización hecha a medida de un contratista en algo que puede ser leído bajo la categoría más amplia y políticamente significativa de “mafias enquistadas en el poder” o traducir a un episodio de tráfico ilegal de armas por parte del Estado

en un ejemplo de “corrupción”, son dos ilustraciones muy claras de lo que realiza usualmente el discurso político. Sobre la base de un hecho aparentemente crudo, se comienzan a desplegar las luchas por la definición del significado de ese hecho. Acontecimientos singulares son puestos en relación y organizados conceptualmente a través de interpretaciones políticamente construidas. La lucha política que se muestra públicamente al conjunto de la sociedad consiste, básicamente, en este tipo de operaciones simbólicas.

Recapitulando, aquello a lo que aquí se hace referencia cuando se dice “agenda política” es un espacio virtual de producción de sentido, definido por un conjunto limitado de posiciones y tomas posibles de posición, en el que convergen actores políticos con pretensiones de “representar” legítimamente a la sociedad. Esta “agenda” es al mismo tiempo un espacio de producción de significados socialmente compartidos –acerca de cuáles son las cuestiones importantes para la comunidad, los mejores métodos para resolver sus problemas y los valores que deberíamos defender ineludiblemente– y una etapa del proceso general de toma de decisiones estatales e implementación de políticas públicas. Pero la agenda no tiene siempre la misma estructura y la misma eficacia social, aun cuando los temas que la constituyen se muestren relativamente estables: existe una diferencia relativa en el modo de organización de la agenda política en función de las fases que atraviesa el proceso político. Más allá de las crisis que se dan periódicamente, el funcionamiento normal de la democracia representativa reconoce dos fases sucesivas: las fases de intensificación de la competencia y las fases de moderación de la competencia. Cada uno de estos momentos da lugar a una forma típica de organización del discurso político.

Por un lado, el *discurso de campaña* propiamente dicho, en el que suele tener un papel relevante la “promesa”. Las campañas electorales son momentos clave en que se definen las relaciones de fuerza entre los elencos políticos: en su lucha por acceder al poder, los agentes del campo político se recuestan sobre la fuente última de toda soberanía democrática (el voto de los ciudadanos). Los procesos que tienen lugar en una campaña electoral –que aparentemente no constituye más que una suerte de extraño y singular mercado, con sus bienes ofrecidos y sus consumidores potenciales– pueden ser –y habitualmente son– traducidos en el marco de una retórica que dota de una significación *sui generis* a las acciones y eventos que tienen lugar en la arena política. Así, la campaña electoral es, al mismo tiempo, una fase del proceso de *selección de gobernantes* –y, en este sentido, una institución fundamental del régimen democrático–, un espacio de *circulación de proyectos de políticas* –y, de este modo, una etapa no menos importante del proceso de creación de políticas públicas, que en última instancia habrá de implementar el “candidato” cuando arribe al timón del Estado– y, finalmente, un *espacio de creación y circulación de ideas*, es decir, un espacio de producción de sentido que colabora en el proceso más general de la construcción social de la realidad.

Por otro lado, el *discurso de gobierno y oposición*, a través del cual los actores de la política van fijando posiciones en relación con temas y acontecimientos en los períodos de transición entre una campaña y otra. En los períodos “interelectorales”, los discursos políticos –y esto no es una afirmación

apriorística, sino una generalización empírica– suelen concentrarse en el juicio –positivo o negativo– sobre la acción de gobierno, en la recomendación de soluciones alternativas a las propuestas por el gobierno, en la descalificación de estas recetas alternativas, etc. En función del lugar que los actores ocupan en la dimensión gobierno-oposición, tienden a posicionarse de uno u otro modo, aunque en algunos casos puedan distinguirse los “oficialismos oficialistas” de los “oficialismos críticos” o aún de los “oficialismos opositores” o “seudo-oficialismos”; lo mismo puede decirse de las “oposiciones”. De todas maneras, estas alternativas empíricas no pueden ser contempladas en la formulación general del esquema de análisis, en el que por razones de simplicidad preferiré señalar los extremos que marcan simbólicamente el sentido de este género de discurso político: es decir, gobierno y oposición. Puesto que mi investigación se concentra en un período de campaña, la lógica de competencia por el acceso al gobierno subordina aquí –aunque no suprime– a la lógica gobierno-oposición.

De esta manera, la tematización política –y, por lo tanto, la agenda misma– presenta diversos matices en función del estado en que se encuentra el campo político en el momento de la enunciación del discurso que la produce. Para ser más preciso, debería decir no ya “discurso” sino más bien “comunicación”, puesto que es ella –y no el discurso aislado– lo que produce el espacio temático que llamamos agenda: la comunicación surge en el momento en que se produce una reciprocidad de los discursos de *ego* y *alter*, es decir, cuando los discursos se entrelazan en un diálogo que abre un escenario complejo y articulado que no es ya la producción de cada uno de los partícipes, sino una obra nueva y polifónica. De este modo, la noción de comunicación no suprime a la de discurso sino que la incorpora en un concepto más abarcativo y relacional. Esta perspectiva nos indica que todo discurso político suele producirse en el marco de un diálogo explícito o implícito: toda toma de posición política tiene como referencia las tomas de posición políticas de los otros partícipes del juego y básicamente de aquellos que ocupan la misma posición estructural en el campo (en nuestro caso, los otros políticos profesionales). Según este punto de vista, la comunicación política tiene una dimensión de reciprocidad que se produce en el campo político mismo: los políticos se hablan los unos a los otros (y también hablan los unos de los otros), se impugnan mutuamente, vetan los argumentos de sus competidores y se recuestan sobre los de sus aliados, etc. Se inaugura así un circuito cerrado de comunicación en el que las principales posiciones son ocupadas por profesionales del juego de la política. Pero hay otro circuito comunicacional que tiene una relevancia institucional mayor y que entraña la vinculación externa entre los actores del campo político y los “profanos”. Toda producción simbólica lanzada desde el campo específico de la política tiene como destinatario directo o indirecto al simple ciudadano, interpelado como futuro elector. El político selecciona un tema para la comunicación –o se acopla a un repertorio temático ya establecido en una virtual agenda política– y lo comunica al público, con el objetivo de que este público reaccione –no necesariamente “ya”, sino cuando sea necesario– positivamente y premie a su interlocutor –o, mejor dicho, al más “exitoso” de sus interlocutores– con un voto, que es síntoma y manifestación material de un proceso de adhesión política cuyas complejidades nos son desco-

nocidas y no constituyen parte del objeto de esta investigación. En todo caso, más allá del modo en que el discurso político sea recibido por su destinatario, lo cierto es que –en el momento mismo de la enunciación– quien produce el discurso apuesta a la obtención de cierta reacción por parte del profano, aunque esto se dé siempre en condiciones de incertidumbre que son propias de la contingencia de toda comunicación.

La dinámica de la tematización política

Si indagamos los procesos de producción de discursos específicamente políticos en la sociedad contemporánea, observamos que –en gran medida debido al desarrollo del espacio público democrático y los medios masivos de comunicación– los actores políticos son generadores cotidianos de diagnósticos de la realidad y de propuestas orientadas a su resolución. De este modo, las tomas de posición públicamente asumidas tienden a presentar un componente cognoscitivo que escapa a los estrechos márgenes de la lucha entre profesionales de la política, aunque este componente cognoscitivo se articula con el elemento puramente agonístico que es propio de la lucha por el poder en el marco de una poliarquía.

En el apartado anterior he distinguido dos estados del juego político que definen dos momentos de la enunciación y, por lo tanto, dos géneros de discurso que se diferencian en un eje temporal; por un lado, el discurso de campaña; por el otro, el discurso de gobierno y oposición. Pero la tematización política es básicamente una organización conceptual de la experiencia y el contenido de los discursos –y, por consiguiente, de las comunicaciones– es tan relevante como las condiciones de la enunciación. En este sentido, los discursos políticos pueden clasificarse –de acuerdo a su contenido– en dos grandes categorías: los que tematizan cuestiones socialmente relevantes –por ejemplo, el modelo económico, la pobreza, el desempleo, la seguridad, la educación– y los que tematizan el propio juego en que los actores están inmersos –los atributos de los actores, el tipo de recursos considerados legítimos, las reglas del juego. Además de tomar posiciones, todo actor profesional de la política “narra” su propia toma de posición y el espacio desde el cual la posición es tomada: de este modo, el discurso político contribuye a constituir un conjunto de espacios inteligibles en el campo político. Así, podría decirse que la política tematiza cuestiones de su entorno (social, económico, mundial, etc.), pero también se autotematiza, convirtiendo al propio juego político en objeto de discurso. En la primera dimensión de su producción simbólica –que podríamos llamar “representativa”, en tanto los actores del campo político pretenden construir instancias de reconocimiento capaces de interpelar a los actores de la sociedad en sus intereses o visiones del mundo social–, la política se abre hacia la sociedad y procura interpretar aquello que considera como “demandas sociales”. En la segunda dimensión –que podríamos llamar “autoconstitutiva”, puesto que contribuye a la delimitación y la descripción del espacio singular de la actividad política profesional– la política se cierra sobre sí misma, limitando un espacio de juego que le es propio y que en gran medida escapa al in-

terés de los “profanos”. Aunque esta investigación ha abarcado este conjunto de problemas, en el presente artículo habré de concentrarme en el primer ámbito problemático: la tematización política de cuestiones sociales relevantes.

A partir del análisis sistemático de los discursos que releva y hace públicos la prensa gráfica, he construido algunos ejes que permiten ordenar a un conjunto de disputas parciales –es decir, temáticas– que han marcado los tiempos políticos del último año del gobierno de Carlos Saúl Menem, el cual coincide con la campaña presidencial de 1999. Además de apuestas estratégicas, todos implican una forma específica de traducir las experiencias sociales vividas en discursos políticos capaces de generar reconocimiento. Así, los elencos políticos buscan los apoyos electorales “re-presentando” las principales inquietudes y angustias de la sociedad.

La economía argentina y su crisis

Hacia finales de la década de 1990, tanto el decálogo neoliberal como sus reinterpretaciones vernáculas habían experimentado sensibles modificaciones. Por un lado, en la agenda de Washington se habían introducido nuevos elementos, vinculados con un nuevo énfasis en las políticas sociales, el papel activo del Estado y una mejor calidad institucional. Por otro lado, ante la presión de los sectores sociales y los conflictos crecientes, los candidatos de los partidos populares se comprometían en una serie de políticas de fomento de la producción y el empleo: el fortalecimiento del sector PyMES, la reestructuración de las economías regionales y el auxilio a la producción agropecuaria ocupaban un lugar central entre las innovaciones de las propuestas electorales.

En la primera formalización de su programa, Fernando De la Rúa sostenía que “en materia económica el gobierno actual deja una situación de graves conflictos estructurales... no puede ser que el 10% más rico de la población acumule el 37% de los ingresos, y el 10% más pobre el 1,6” (Colombo, 1999). Por su parte, Carlos “Chacho” Alvarez completaba el juicio afirmando que “hay que salir del modelo de concentración económica y de exclusión e ingresar en una estrategia productiva que la Argentina no tiene” (Colombo, 1999). Más allá del aparente deslizamiento hacia una posición crítica, el “consenso ortodoxo” en lo relativo a la política económica era generalizado en las fuerzas mayoritarias, aunque pudieran señalarse defectos menores o sobreactuarse las diferencias. El punto clave del problema era sin dudas la “convertibilidad”, que un nuestro país se había convertido en los últimos años en sinónimo de estabilidad: siendo un valor apreciado por la sociedad, ningún político pragmático podía pronunciarse explícitamente contra ella, al menos en público. Y los propios candidatos de la Alianza irían moderando sus diagnósticos y propuestas. Así, en los primeros días de mayo el principal economista de la Alianza –José Luis Machinea⁷– expresaba el apoyo de la coalición al mantenimiento de la convertibilidad (Semán, 1999[a]). En un conjunto de declaraciones públicas, Machinea fue dejando claras las principales posiciones del futuro gobierno en el plano económico: el equilibrio fiscal era uno de los pilares de la futura política económica, en la que también se daba un lugar al fortale-

cimiento de las PyMES y la producción en general. Puntos más periféricos de la propuesta económica aparecían en boca de los economistas más políticos de la Alianza, Adalberto Rodríguez Giavarini y Rodolfo Terragno: en ambos casos, cuestiones como el salto tecnológico, la revolución educativa y el desarrollo de las economías regionales tenían un lugar importante.

En lo relativo a los programas económicos, la posición de Eduardo Duhalde aparecía desde el principio bastante continuista y moderada, aunque para amplios sectores de la sociedad resultara poco creíble: “nuestras propuestas económicas parten de preservar los logros alcanzados a fin de mantener el ritmo de crecimiento logrado” (Colombo, 1999). Pero con el correr de la campaña, una serie de errores estratégicos y contradicciones –obligadas por la necesidad de remar contra la corriente que se expresaba en los sondeos pre-electorales– vinieron a complicar aún más el panorama. En los primeros días de mayo, al notar que había perdido la iniciativa en la campaña electoral, el candidato peronista lanzó un errático pedido de condonación de la deuda externa argentina, mientras pocos meses antes se presentaba como el único líder con capacidad para garantizar las reformas orientadas al mercado implementadas por el gobierno de Menem y aprobadas por los organismos multilaterales. Ante las críticas generalizadas, Duhalde relativizó sus argumentos y se recostó sobre la autoridad de la Iglesia, que había venido sosteniendo este reclamo desde tiempo atrás; una vez neutralizado el tema de este modo –convertido en simple diagnóstico y no en propuesta de gobierno–, incluso De la Rúa llegó a compartir la definición: “La deuda y sus intereses no les permiten a los países en vías de desarrollo atender las demandas sociales y obligan a ajustar aún más la economía” (Semán, 1999[c]). Los argumentos duhaldistas no eran descabellados, pero sin duda resultaban extemporáneos en un contexto marcado por el economicismo, la resignación y el fatalismo. Por su parte, en lo estrictamente estratégico la batalla ya estaba perdida y la guerra no tardaría en resolverse también en derrota.

En los últimos días de septiembre, Duhalde introduce otro elemento de diferenciación respecto a la propuesta aliancista. En un acto multitudinario, rechaza las políticas de ajuste y sostiene que quienes quieran el ajuste voten a De la Rúa. Pocos días antes, el economista de la Alianza, José Luis Machinea, había sostenido que para lograr el nivel de déficit adecuado a la ley de responsabilidad fiscal⁸ sería necesario un ajuste de 5.000 millones de dólares, lo que implicaría una reducción de más de 1.000 millones de dólares en el gasto público. Aprovechando esta propuesta, Duhalde salió a impugnar a su rival:

Escuché que Machinea apoya las recetas de ajuste, dijo que en el Fondo están contentos porque creen que De la Rúa gana las elecciones; claro, están contentos ellos, pero no están contentos los trabajadores argentinos, los pequeños y medianos industriales, comerciantes y productores rurales, los cuentapropistas... Para enfrentar la crisis hay dos caminos: el que proponen el FMI y la Alianza, el de nuevos ajustes, que es el planteo fiscalista, y el que proponemos los productivistas, que consiste en desechar más ajustes y promover un shock productivo y del trabajo (Eichelbaum, 1999).

Duhalde sostuvo este discurso hasta el final de la campaña, acompañándolo con la puesta en escena de los colores y el folklore del peronismo histórico, recurriendo a las viejas interpelaciones nacional-populares y construyendo a su adversario como el emisario de los poderes externos. Durante la campaña, Duhalde procuró diferenciarse de sus competidores frente al electorado y recurrió a tres golpes tácticos (la tematización de la deuda externa, la convocatoria a una Concertación⁹ y el rechazo al ajuste pedido por el FMI): puesto que el marco global de los programas era casi idéntico, lo único que quedaba era encontrar claves de distinción, aunque no fueran más que simples salidas efectistas. En una época en que los márgenes de maniobra para la política económica del Estado son muy estrechos, la distinción política sólo es posible si se expande el rango de la tematización económica de modo tal que puedan aparecer dimensiones periféricas al núcleo duro: y es allí donde pueden construirse algunas diferencias en los matices.

El programa económico delineado por Cavallo durante la campaña electoral se orientaba a reducir el déficit fiscal por vía de la eliminación de subsidios, para así equilibrar las cuentas y evitar el endeudamiento, pero también bajar los impuestos, de manera tal que los particulares tuviesen buenos motivos para invertir y consumir, evitando la espiral recesiva. En todo caso, las distancias que Cavallo quería remarcar con respecto a los demás candidatos eran exclusivamente técnicas y, en mayor medida, de capacidad: Cavallo se presentaba no sólo como un político capacitado para enunciar bellos discursos, sino también como un hombre con conocimiento técnico y experiencia de gobierno. Su plan económico era, a su entender, menos improvisado y menos proclive a las tentaciones “populistas”:

... el plan De la Rúa-José Luis Machinea es la continuidad perfecta del plan Menem-Roque Fernández. En Wall Street, sintonizaron en los más mínimos detalles. Estuvieron de acuerdo en no bajar los aportes patronales, una actitud improductiva. Fue un reflejo del acuerdo programático que ya tienen desde que la Alianza apoyó la reforma impositiva de Menem-Fernández y la reforma laboral de Erman González. La solución es retomar el plan económico Menem-Cavallo, que yo diseñé e implementé (Calvo, 1999[a]).

Por lo demás, aquí como en otros temas, importa tanto el contenido de los enunciados como el prestigio, la credibilidad y el valor de la palabra del enunciador.

En términos generales y pese a los cambios de tono, las políticas económicas neoliberales eran todavía apoyadas por los actores políticos y sociales relevantes de la Argentina. De hecho, las coincidencias quedaron claras cuando a finales de julio los potenciales ministros de economía visitaron Wall Street. En un nivel menos general, el consenso abarcaba la continuidad de ley de convertibilidad, el mantenimiento de las privatizaciones, la observancia de los compromisos financieros externos y el cumplimiento de las asignaturas pendientes, tales como la reforma laboral y la reducción del déficit fiscal (Velazquez, 1999 y Rosales, 1999).

La nueva cuestión social

Desde 1994 la cuestión social estuvo en el centro de la agenda política, y durante la campaña de 1999 –en el marco de una crítica situación de pobreza, exclusión y desempleo– el proceso político obligó a los aspirantes al gobierno y sus colaboradores a pronunciarse sobre las asignaturas pendientes de la etapa menemista. La apertura del espacio de decibilidad y de problematización quedaba, sin embargo, relativamente acotada: las reformas macroeconómicas eran irreversibles, por lo que habría que compensar la desintegración social y las desigualdades que ellas generaban con políticas públicas contra la pobreza y el desempleo, acompañadas por una imagen de austeridad y respeto por la desgracia de los sectores populares y los nuevos pobres. Como tantos otros temas, la cuestión de la pobreza y la desigualdad suscita diagnósticos distintos, que suelen implicar líneas de acción divergentes. Los principales ejes de distinción aparecen, entonces, en la delicada relación entre mercado y Estado, y en los efectos que se deducen del funcionamiento de cada una de estas esferas.

En la dinámica misma de la competencia electoral y ante el descrédito social del gobierno de Menem, incluso el candidato oficialista se pronunciaba como el más férreo opositor a las políticas desarrolladas en el país en los últimos años. Pero el diagnóstico de Duhalde no era tan simple como para ignorar que él había sido vicepresidente de Menem entre 1989 y 1991: por esta razón, las críticas se concentraban en el segundo gobierno de Menem. El candidato justicialista entendía que, durante el primer gobierno de Menem y en general hasta la salida de Cavallo¹⁰, se había logrado estabilizar la economía del país, pero que las políticas sociales y de desarrollo con justicia social que se habían prometido en la campaña de 1995 no se habían realizado: era, entonces, el turno de quien había sostenido una amplia red de asistencia social durante más de ocho años en el distrito más importante del país, la provincia de Buenos Aires.

De todas maneras, el corrimiento de los debates hacia la cuestión social favorecía globalmente a la oposición: se trataba, de hecho, de una asignatura pendiente del gobierno saliente. En los primeros días de abril, el candidato De la Rúa lanzó una serie sucesiva de declaraciones que llamaban la atención sobre el fracaso del gobierno de Menem en el fomento de mejores condiciones de vida:

El Estado olvidó a la gente, este gobierno le dio la espalda... insisto en que las desigualdades sociales se han acentuado. Menem niega todo. ¿Quién puede creerle? Esto explica su desinterés por los problemas sociales (diario *Clarín*, 6 de abril de 1999).

Uno de los elementos centrales de la cuestión social en la Argentina es, claramente, el desempleo. Y el debate sobre el desempleo tuvo un lugar central en la campaña electoral. En un arrebato de audacia, Fernando De la Rúa organizaba un vínculo causal fuerte entre el modelo económico y la situación social del país:

Este gobierno menemista dio la espalda a la gente, les tiró el mercado en la cara y ahí están las cifras de desempleo y pobreza, los casos de desnutrición, los índices negativos de salud, los magros resultados educativos, la inseguridad que crece (diario *La Nación*, 5 de abril de 1999).

Va de suyo que este argumento no puede seguir siendo desarrollado sin entrar en contradicción con el consenso económico dominante. Imputar al mercado ciertas consecuencias no deseadas puede llevar a posturas anti-mercado, que son impensables en el horizonte político-cultural de los dirigentes de los partidos mayoritarios en la Argentina y que, además, eran todavía poco rentables en el mercado político. En efecto, De la Rúa sostuvo estas ideas a comienzos de abril y desató una polémica con el presidente Menem: el presidente intentó demostrar con cifras que los indicadores sociales no se habían deteriorado, mientras que el candidato opositor replicaba que Menem no vivía en la realidad. Por su parte, y como si Menem necesitara aún de su viejo escudero reformista, Domingo Cavallo sostenía:

...si le echamos la culpa del desempleo a la reforma económica, a las privatizaciones o a la apertura, entonces nunca vamos a encarar las reformas pendientes... (frente al problema de la pobreza hay dos actitudes por tomar:) una revolucionaria, que es bregar por más reformas, y otra completamente reaccionaria, que califica a las reformas de la década del '90 como neoliberales o conservadoras y defiende una vuelta a los '70 o a los '80 (diario *La Nación*, 11 de abril de 1999).

Retomando el estilo político de Menem –el discurso dualista que señala un único camino para el progreso, o la recaída en el abismo– Cavallo invertía así los polos de las posiciones ideológicas, como si quisiera apoyar la hipótesis de Giddens sobre la radicalización de las derechas y la actitud defensiva de las socialdemocracias (Giddens, 1998). Casi inmediatamente, De la Rúa suspendió todo cuestionamiento de fondo al modelo económico y retomó la que había sido su senda hasta entonces: generalidades y eslóganes. La ortodoxia se había impuesto nuevamente, a través de la censura y la autocensura, y sólo ciertos márgenes de heterodoxia eran siquiera enunciables. El peso de la ortodoxia neoliberal y la presencia de censuras que operan sobre el discurso económico que aparece en el campo político pueden inferirse de la ausencia de discursos posibles tales como el desarrollista o el nacional-estatista. Pero incluso quien no sostenga la más férrea ortodoxia puede sufrir sanciones: véanse las repercusiones de las declaraciones de Eduardo Duhalde sobre la deuda externa, o el conflicto que acarrearón las afirmaciones de De la Rúa que acabamos de relatar.

Este caso es sólo una manifestación particular de una situación estructural que se funda en el consenso neoliberal que triunfa en la batalla cultural de finales de los '80. Por eso, en el marco de la acepción de las reglas del juego, las propuestas de la campaña presidencial de 1999 tendieron a concentrarse en la redefinición de las relaciones laborales y el fomento de las PyMES, a lo que deberían sumarse un Estado más dinámico y algunas otras medidas complementarias (especialmente, políticas sociales focalizadas que no estuvieran mediadas por el clientelismo). Esto lo compartían todos los actores relevantes del campo político, aunque cada uno presentara sus matices.

En cierto modo, los candidatos que compitieron en las elecciones de 1999 expresaban posiciones más estatistas que las del menemismo gobernante. Por esta razón, imputar la pobreza y el desempleo a un déficit de acción estatal –un

déficit que, en sintonía con las nuevas recomendaciones del Banco Mundial, se entendía especialmente como un déficit cualitativo– habilitaba propuestas de reforma del Estado como las que aparecían en las plataformas electorales de los principales partidos.

En los últimos días de la campaña, los candidatos respondieron por escrito un cuestionario presentado por el diario *Clarín*, en el que se les presentaban los tres temas principales de la agenda. Sobre el problema del desempleo, De la Rúa resumía:

El país está en emergencia ocupacional. Si soy presidente, todo el Gobierno en conjunto estará empeñado en crear trabajo... Programas concretos: plan de apoyo a las pequeñas y medianas empresas con el Banco Nación, acceso al crédito, reducción de tasa de interés, reducción del costo laboral, simplificación de los trámites laborales... Incrementar programas de capacitación para adultos, de empleo joven, de jefes/jefas de hogar y para discapacitados. Apoyo para microemprendedores y nuevos emprendimientos con apoyo tecnológico (Santoro, 1999).

En este pasaje la cuestión social y la política económica aparecen articuladas. El papel del Banco Nación y la idea de que todos sus ministros iban a ser “Ministros de Trabajo” fueron importantes en la campaña, especialmente en los *spots* publicitarios. Por lo demás, la primera frase de este párrafo representa cabalmente el tono que tuvo, en general, el discurso del candidato presidencial de la Alianza.

La propuesta de Duhalde para reducir la tasa de desempleo volvía sobre los elementos centrales de su proyecto de Concertación:

Las medidas concretas y de aplicación inmediata son las que incluimos en la propuesta de la “Concertación para la estabilidad, la producción y el empleo” que están discutiéndose en el Congreso de la Nación. La primera de ellas, la refinanciación de las deudas bancarias de las empresas con un plazo de 20 años ya es ley; siguen ahora la rebaja del IVA al 15 por ciento, la suspensión del cobro de impuestos para las nuevas PyMES por un año, la recalificación bancaria, la eliminación del impuesto a la renta mínima presunta y la suspensión de los despidos por un año. Para esto se requiere un Estado fuerte –pero no elefantiásico–, que deje de ser músculo para pasar a ser cerebro y que intervenga en términos de mediador. Se trata de un Estado activo en áreas como la educación, la salud, los sistemas de seguridad social, el desarrollo y el avance científico-técnico, que dé total libertad a la iniciativa privada pero que esté presente, por ejemplo, para ayudar a colocar la producción fuera de nuestra frontera (Santoro, 1999).

Como ya he señalado antes, en el marco de un conjunto de recetas compartidas por todos los candidatos, aparecen aquí dos elementos diferenciadores: la rebaja del IVA del 21% al 15% y la suspensión de los despidos por el plazo de un año. Estas propuestas diferenciadoras respecto al “modelo” y respecto a sus adversarios venían a sumarse a una estrategia que aparece cíclicamen-

te: la tendencia a presentarse como el cambio, sin que esto significara que sus rivales fueran la simple continuidad. En esta operación Duhalde se ofrecía como la alternativa superadora del gobierno de Menem, mientras daba a entender que la Alianza no sólo no era capaz de encarnar el cambio sino que tampoco podía conservar los logros alcanzados en el período previo. En algunas ocasiones, Duhalde llegó a poner en duda la capacidad de la Alianza para ser siquiera la continuidad del modelo económico vigente (es decir, la estabilidad). En otros casos, dudaba de la sinceridad –o llamaba la atención sobre la mora– del apoyo aliancista al modelo vigente:

Todas las leyes que llevaron a la estabilidad en la Argentina fueron votadas en contra por el radicalismo, porque no tuvieron la convicción de que con esas normativas se lograba la estabilidad, como no creo que ahora tengan convicción para mantenerla (Eduardo Duhalde, diario *La Nación*, 1 de julio de 1999).

Finalmente, Cavallo decía:

Mi Plan “Un hombre Un Empleo”, cambiará de inmediato las expectativas, restablecerá la competitividad y el crecimiento sostenido de la economía. Las PyMES podrán operar en blanco, acceder al crédito y crear 2.400.000 empleos en 4 años, sin impuestos distorsivos, simplificando la registración laboral a un solo trámite y mediante la descentralización de los convenios colectivos de trabajo a nivel regional y de empresas (Santoro, 1999).

Bajar los costos laborales y atacar a los grandes sindicatos nacionales fueron los ejes centrales del discurso de Cavallo sobre el desempleo durante la campaña. Además, declaró numerosas veces la intención de bajar los impuestos. No aparecían recetas del tipo que Duhalde llamaba entonces “productivistas”. Por el contrario, Cavallo en varias ocasiones responsabilizó a los sindicalistas peronistas –actor central en un acuerdo o “concertación” social como la que proponía Duhalde– por la crisis laboral y el desempleo: en esta alocución final no perdía la oportunidad de reiterar su tesis anti-sindical, con fuerte arraigo en la sociedad y especialmente en el segmento de clase e ideológico más proclive a votar a Cavallo.

La corrupción política

Las preocupaciones sobre la corrupción política –que en nuestro país se focalizan en lo que los funcionarios hacen para favorecerse a sí mismos y a sus allegados, más que en cuestiones estructurales de corrupción estatal y particularismo en el vínculo con los actores sociales y económicos– se profundizaron a partir del segundo gobierno de Carlos Menem. Esto no significa necesariamente que este gobierno haya sido más corrupto que los anteriores –la medición de este atributo no es sencilla y, en todo caso, la verificación de lo que efectivamente ocurrió no es relevante a efectos del presente estudio–, sino que el tema de la corrupción comenzó a emerger como una cuestión preocupante en las encuestas de opinión pública, en parte gracias a la prédica militante de conocidos periodistas. Pero una vez que el tema ocupó uno de los lugares centrales

en el campo de problemas considerados socialmente relevantes, no pasó demasiado tiempo antes de que aparecieran en el campo político los portavoces de estas nuevas demandas sociales. Como es natural, frente a un tema sobre el que todos los dirigentes hablan y respecto al que los juicios negativos son unánimes –de palabra y públicamente, claro está–, los diagnósticos y las propuestas presentan variaciones de distinto grado, variaciones que también encontramos en el modo en que se describe y define a la corrupción.

En la coyuntura de 1999, los miembros de la fórmula aliancista eran los paladines de la lucha anti-corrupción. En el caso de De la Rúa, la “transparencia” había sido la consigna central de su gestión municipal en la ciudad de Buenos Aires, aunque los tópicos de la moralidad administrativa y la vigencia plena de las instituciones republicanas habían sido banderas históricas de la Unión Cívica Radical durante décadas:

Vamos a terminar con la impunidad. Voy a investigar para atrás; Duhalde, no. Esa es la diferencia. Investigar los hechos sucedidos más que una medida es una condición necesaria para refundar un Estado ético... Seguramente, este tiempo será recordado como el tiempo del desempleo y de la corrupción. No ha habido una política de empleo. Y en materia de corrupción, no ha habido una política para combatirla, sino una actitud de encubrir, proteger o defender (diario *Clarín*, 26 de agosto de 1999)... Vamos a investigar para atrás y para adelante. Vamos a investigar a Menem, a Duhalde y a todos los gobiernos que se terminan. Mi gestión también está a disposición (Calvo, 1999[b]).

Desde su formación, la Alianza tuvo al tema de la corrupción entre sus consignas fundamentales. Desde tiempo atrás, existía en amplios sectores de la sociedad argentina la convicción de que los funcionarios del gobierno de Menem se habían enriquecido ilícitamente: como la Justicia era controlada por el Poder Ejecutivo, la impunidad estaba garantizada. Aunque con un perfil notoriamente distinto, Duhalde era caracterizado como un administrador despótico que había derivado la mayor parte de los recursos del gobierno de la Provincia de Buenos Aires al clientelismo político y al fortalecimiento de su estructura dentro del Partido Justicialista. A decir verdad, estas creencias arraigaban en un mito popular más extendido: los peronistas hacen cosas, aunque roban; los radicales son más honestos, pero no saben gobernar.

Por su parte, Duhalde –quien no contaba con una imagen demasiado positiva en lo que a su honestidad respecta– solicitaba a principios de junio que se dejase fuera de la campaña el tema de la corrupción: el argumento para justificar este pedido partía del hecho de que existen buenos y malos, honestos y corruptos, en todas las fuerzas políticas, y no era sostenible la condensación entre PJ y corrupción que proponía discursivamente la Alianza (Semán, 1999[b] y diario *La Nación*, 6 de junio de 1999). De todos modos, en su última enunciación pública antes de la elección, y ante el carácter central que el tema había adquirido durante la campaña, Duhalde escribía:

Mi compromiso ético se apoya en la inmediata adopción de ocho medidas concretas. Darle a la oposición política el manejo de los organismos

de control del Estado. Derogar toda ley que disponga un tratamiento especial en materia de jubilaciones. Sancionar una ley que controle el financiamiento de los partidos y otra que castigue severamente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Instaurar el juicio de residencia de los mismos. Sancionar una ley de incompatibilidades morales y económicas en la función pública. Combatir con todas las armas y el apoyo internacional el potencial corruptor del narcoterrorismo. Incorporar el tema de la ética en la Ley de Educación (Santoro, 1999).

En esta batería de propuestas estaba implícito un diagnóstico, que en gran medida expresaba el triunfo de la visión aliancista sobre el tema. La primera frase apunta a fortalecer el punto débil de la imagen de Duhalde –“mi compromiso ético” remite justamente a su mala fama en este rubro–, mientras que el resto vincula a la corrupción con los pocos controles institucionales, la falta de transparencia en el financiamiento de la política y la acción de bandas delictivas profesionales vinculadas al narcotráfico.

Mientras el peronismo guardaba relativo silencio y la Alianza capitalizaba los tópicos vinculados con el particularismo, Domingo Cavallo lanzaba en septiembre una acusación que venía a reforzar la denuncia previa de un pacto de impunidad entre radicales y peronistas:

La UCR y el Frepaso presentaron muchísimos pedidos de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, hablaron de la remoción de muchos jueces, pero nunca hicieron nada... si no se cambia a los jueces y no se tienen jueces y fiscales independientes, este tema de la lucha contra la corrupción termina en una denuncia ante la Justicia que apaña a los delincuentes y persigue a los denunciantes (diario *Clarín*, 30 de septiembre de 1999).

La crítica a la Alianza era relativamente moderada: según Cavallo, sólo denunciaban y eso no tenía consecuencias efectivas. Pero más firme, aunque implícita, era la crítica a quienes habían convertido a la Justicia en un espacio más de control y dominio. De todos modos, en ningún momento Cavallo logró capitalizar estas afirmaciones, que parecían estar condicionadas por la lógica del campo y las señales de la opinión pública más que por el propio universo de pensamiento y los proyectos del economista.

En el tópico de la corrupción, la Alianza fue la vencedora absoluta del debate. En esta cuestión más que en cualquier otra, el éxito de las prédicas residía más en la credibilidad pública de los enunciadores que en los contenidos de la enunciación. Y, desde años atrás, los candidatos de la Alianza habían logrado convencer al electorado de que el Partido Justicialista en el poder era el principal responsable de la corrupción.

La lógica del discurso y la lógica del campo político

El análisis de los materiales que he presentado hasta aquí contiene, de manera implícita, una interpretación de los condicionantes y los motivos de

los procesos de tematización política en la Argentina reciente, y específicamente en la última campaña presidencial.

Los diversos aspectos del discurso político no pueden ser comprendidos sociológicamente si no se tienen en cuenta los marcos institucionales y simbólicos en los que cobran existencia. La palabra política no es una palabra desinteresada: el componente descriptivo o explicativo de un discurso político –es decir, su dimensión cognoscitiva– tiene un valor *per se*, en tanto expresa condicionamientos sociales que muchas veces pasan desapercibidos para los propios actores y analistas expertos de la política. Pero su razón de ser más inmediata está directamente anclada en el hecho fundamental de la competencia por el acceso a cargos y espacios de poder político, usualmente vinculados al Estado, aun cuando en los últimos tiempos hayan podido crearse nuevos ámbitos de relevancia política (especialmente, la capacidad de influencia sobre la opinión pública y sobre las autoridades formalmente constituidas del Estado, los partidos y los medios de comunicación).

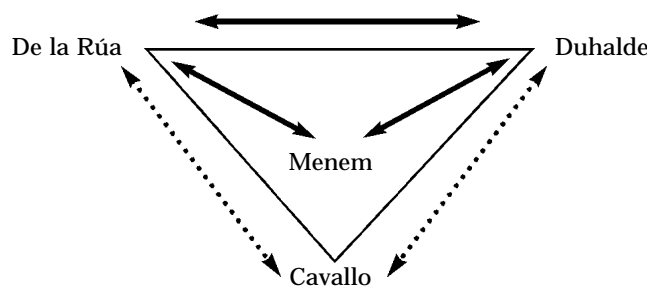
En términos generales, la discursividad pública que se pone en escena durante una campaña electoral está condicionada por las tradiciones políticas que operan tanto sobre los agentes partidarios como sobre el electorado en general, por los rasgos culturales más amplios que existen en la sociedad y por factores coyunturales vinculados a acontecimientos que hacen que la atención se dirija a ciertas cuestiones y no a otras. Pero más allá de estos rasgos del contexto global de la sociedad y la dimensión política de su existencia, hay un complejo dispositivo de factores que opera directamente sobre la dinámica de la agenda política: en el campo político se ponen en escena luchas entre partidos que están directamente determinados no ya por los conflictos societales que expresarían de manera inmediata, sino por procesos más complejos de mediación y expresión que se dan por la tendencia general al ajuste de la oferta y la demanda políticas, y los juegos de diferencias que los partidos introducen en sus estrategias para lograr una oferta dotada de relativa especificidad.

Esta competencia entre partidos se expresa en los temas que son colocados en el centro de la agenda política y en las posiciones que los actores logran ocupar respecto a ellos. Durante la campaña de 1999, a los dos “supertemas” de la agenda –cuestión económica y cuestión social– se agregan problemas que no por accesorios carecen de relevancia: la corrupción es uno de ellos, pero también vale señalar la inseguridad y el funcionamiento de la Justicia. Esto muestra que, con la desestructuración del dominio exclusivo del menemismo sobre la política nacional y su agenda, que fue acompañado por una intensificación de la competencia política a partir de 1997, se abrieron los horizontes de lo que era menester someter a discusión pública e instalar en la agenda, como primer escalón hacia la instrumentación de políticas públicas destinadas a resolver cuestiones antes no atendidas. De todas maneras, hay temas que socialmente son considerados de primera importancia –educación, salud, calidad de vida, seguridad social– que, en el período analizado, sólo son *nombrados* por aquellos a quienes compete profesionalmente la discusión política de los caminos a seguir en estas áreas. Igualmente, hay que tener en cuenta que muchos de los debates de campaña están directamente condicionados por

las estrategias electoralistas: se trata de ofrecer diagnósticos y propuestas sobre cuestiones que preocupan a la sociedad y que no han recibido una respuesta del gobierno en funciones. Esto se evidencia claramente en la centralidad de cuestiones como el desempleo, la corrupción y la inseguridad. En el caso de los otros *issues*, especialmente en lo relativo a la estabilidad económica, todos deben pronunciarse de modo tal que quede garantizada la continuidad de un paquete de políticas que cuenta con amplio respaldo social.

Además de los temas que dan forma a los debates públicos –las posiciones, las tomas de posición de los actores son relevantes en la comprensión de la dinámica del campo político y la formación de la agenda. Dados los condicionamientos de la estructura competitiva del campo, los actores políticos deben invertir esfuerzos en un tipo de operación discursiva que busca poner de relieve las diferencias entre las distintas propuestas: durante la campaña previa a los comicios, los distintos temas –crisis económica, desempleo, corrupción, inseguridad, etc.– abren espacios semánticos alrededor de los cuales los distintos actores van planteando tácticas de posicionamiento en función de sus objetivos político-electorales, que incluyen como estrategia central la “producción de la diferencia”, es decir, el señalamiento de las alternativas con las que ha de enfrentarse el votante a la hora de optar entre un candidato u otro. Usualmente, los candidatos describen su posición y las de sus oponentes, tratando de destacar la superioridad de la propia propuesta. Pero la campaña presidencial argentina de 1999 se caracterizó por un alejamiento relativo del modelo clásico y tuvo el formato de un “triángulo imperfecto”, un sistema de posiciones que podría esquematizarse del siguiente modo:

Los polos dominantes del campo político en la Argentina (1999)



La clave del triángulo fue la presencia de Menem, que distorsionaba la estructura de los debates. De este modo, la producción de la diferencia política no se limitaba solamente a la disputa entre los candidatos, sino que también ponía en cuestión la relación con el gobierno de Menem. Así, el discurso de campaña se superponía con el discurso de gobierno y oposición: en este caso, el principal perjudicado por la situación era Duhalde. Debido a su disputa interna con Menem y a la lectura de las tendencias de opinión dominantes en la sociedad, Duhalde procuraba distinguirse del gobierno: si el “cambio” era lo

que el electorado buscaba (y así lo revelaban las encuestas de opinión), Duhalde se ofrecía como una alternativa al menemismo: “Yo soy el cambio, no la continuidad del presidente Carlos Menem” (diario *La Nación*, 14 de mayo de 1999). Pero los malabares de Duhalde nunca lograron tener efecto sobre el electorado: no es que sus diferencias con Menem no fueran sinceras –en principio, lo eran tanto como las de De la Rúa–, sino que la propia estrategia de Menem tendía a descolocar una y otra vez al gobernador bonaerense, desarticulando cada uno de sus intentos por tomar la iniciativa en la campaña y circunscribir la lucha al eje Duhalde-De la Rúa. Con las dificultades de Duhalde para desprenderse de la figura de Menem también colaboró, obviamente, el discurso de la Alianza. Frente a la operación duhaldista de distinción respecto a Menem, la Alianza en bloque salió a poner de relieve la colaboración brindada por Duhalde al gobierno de Menem durante, por lo menos, ocho años. Y las investigaciones sobre las razones del voto que se realizaron inmediatamente después de las elecciones revelaron que los ciudadanos que buscaban un “cambio” creyeron encontrarlo en la fórmula aliancista.

El formato de las interacciones entre los discursos políticos presenta homologías con las orientaciones de los actores en sus luchas políticas. Los discursos analizados en esta investigación acompañan –en el plano estratégico– las direcciones predominantes de los conflictos en el seno del campo político. Y esto no es completamente secundario, porque estos discursos –además de expresar estados de opinión y líneas de pensamiento existentes en la sociedad– están marcados por la competencia estrictamente política y por el modo en que los actores de este juego incorporan en sus propias interacciones estos factores externos. Durante la campaña presidencial, sólo hubo un escenario para la cooperación entre actores: la discusión sobre una segunda reelección de Menem puso en la misma vereda a los tres candidatos presidenciales. El resto de los temas, o bien fueron neutralizados, sin dividir aguas entre los actores, o bien fueron tematizados en función de las distinciones inherentes a las luchas políticas. Los márgenes de la distinción estaban, a su vez, definidos por el contexto político-ideológico y social más general (lo que resultaba más que evidente en el caso de las propuestas económicas).

Pero el modelo simple que procura explicar la construcción de la agenda sobre la base de la relación entre el campo político y la sociedad puede resultar anacrónico en formaciones sociales en las que los medios de comunicación operan como filtros de la mayor parte de las comunicaciones entre ambos espacios¹¹. En nuestras modernas sociedades democráticas –aun en las periféricas–, los temas que organizan los debates políticos son el producto no completamente deliberado de las interacciones entre los políticos profesionales, los medios de comunicación y la sociedad, expresada ésta bajo su forma específica y limitada de “opinión pública”. Existen diversas teorías sobre las relaciones de causalidad e interdependencia entre estas tres esferas, todas ellas comprometidas con objetos de análisis de corto alcance. No debería escapar a cualquier sociólogo que, en la larga duración y visto desde el punto de vista más elemental –como, por ejemplo, pensando desde categorías como “límite de conciencia posible” u “horizonte de expectativas”, etc.– la presencia de cier-

tos temas, ideas o posiciones en las capas más superficiales de la vida social –los medios masivos, las encuestas de opinión, el discurso político– arraiga en condiciones históricas cuya formación se ha dado a partir de la interacción entre experiencias y discursos generados en distintos espacios de producción de sentido, difundidos en todo el tejido social. Ir más allá e intentar establecer cuál de las instancias es la determinante en última instancia –o el foco desde el que irradian los saberes y discursos sociales– no es una pregunta científica, sino más bien metafísica. En cada caso, será necesario establecer los circuitos de gestación y distribución de ciertas ideas y temas, que en ningún caso se darán en un ámbito monopólico. Más allá de la insuficiencia del conocimiento disponible sobre los procesos básicos y profundos de formación de los sistemas de creencias que sirven a una sociedad para constituirse a sí misma a través de formas simbólicas, sabemos que no se trata de un proceso simple que pueda ser pensado como “manipulación”, “influencia” o “sujeción ideológica” a partir de un polo dominante único. Los procesos a través de los cuales nos hacemos una idea del mundo social y de nuestro lugar en él son demasiado variados como para subsumirlos en un solo principio articulador, sea la dominación de clase, el control político de las masas por las élites o la subordinación de los individuos al poder persuasivo de los medios de comunicación. Los sectores económicos dominantes, los elencos políticos y las empresas periodísticas inciden, ciertamente, sobre los modos en que se procesan y seleccionan las ideas que habrán de servir como insumos para la formación de esquemas de interpretación de la realidad. Pero estos esquemas de interpretación están formados no sólo por lo que los individuos toman de los medios sino por un conjunto de experiencias vitales, que tienen escenario en las distintas esferas concretas de sociabilidad. Es aquí donde aparecen, además de los discursos públicos que circulan a través de los medios masivos, los circuitos localizados de distribución de formas de hacer y pensar: la familia, los grupos primarios, la propia clase social (en la que uno vive más o menos integrado, tanto en el lugar de trabajo como en el barrio, la escuela, la familia, el club), operan como marcos de integración simbólica de los individuos, y por tanto inciden sobre la forma en que ellos se representan la propia realidad. Esta tensión entre lo mediático y lo localizado adquiere una dimensión relevante en lo que respecta a cuestiones políticas.

Toda teoría general queda aquí desechada. Lo único que está a nuestro alcance es certificar hasta que punto los medios, los discursos políticos y la opinión pública tienden a concentrar su atención sobre ciertos temas. Este fenómeno puede comprenderse desde la perspectiva más amplia de la “construcción social de la realidad”¹² –o partiendo de la idea más general de cómo las sociedades o las épocas se representan sus propias condiciones de existencia– y, al mismo tiempo, desde un punto de vista más estrecho, como el que nos provee la teoría del “mercado político” y su hipótesis sobre el ajuste de la oferta política con los estados de la sociedad (Baudouin, 1998; Braud, 1993; Gaxie, 1996; Lagroye, 1989). Aun reconociendo su corto alcance, esta última perspectiva puede permitir una explicación de los hechos analizados en esta investigación a partir de sus condicionantes inmediatos. Si comparamos los temas que aparecen en los discursos políticos –que a su vez son mediados por

la prensa y la televisión– y en las encuestas de opinión, llama la atención cómo ambos espacios discursivos varían de manera concomitante. Es evidente que los debates políticos se posan sobre las cuestiones que resultan de interés para la sociedad. En épocas pasadas, el rol de los políticos era muchos más activo, y era parte de su responsabilidad producir los estados de opinión. Pero con la diferenciación de la sociedad y los cambios en las tecnologías de la comunicación, esta función de “producir la agenda” se distribuyó de manera más plural. En los últimos tiempos, las encuestas de opinión pública han comenzado a operar como base de las estrategias discursivas de los actores políticos. No resulta sorprendente, entonces, que los temas que ordenan la agenda de debates políticos coincidan de manera casi perfecta con los temas que las encuestas de opinión relevan como los más preocupantes para la sociedad: el desempleo, la corrupción y la inseguridad ocupan los primeros lugares en todas las encuestas dadas a conocer durante 1999. A esto habría que sumar los *issues* específicamente políticos –reelección, internas partidarias, pujas por las candidaturas–, y los marcos de la discursividad política se hallarían completamente delimitados.

Conclusiones y reflexiones propositivas

Hemos recorrido hasta aquí el proceso político argentino del año 1999 a partir del análisis de las producciones discursivas de sus principales actores. En este camino hemos observado que los debates públicos se organizan alrededor de un conjunto de temas que están determinados por los estados de opinión de la sociedad y por los marcos más limitados que define el campo político a través de sus ejes de competencia y sus mecanismos de censura.

Los procesos empíricos indagados en el cuerpo de esta investigación muestran que los temas que organizaron efectivamente la discusión política en el año 1999 fueron relativamente acotados: desempleo, inseguridad, modelo económico, corrupción. Sólo periféricamente ingresaron temas que son considerados clave, tanto en la sociedad como en el campo político: la educación, la salud y la seguridad social recibieron alusiones superficiales –aunque ocupaban un lugar central en las plataformas oficiales aprobadas por los órganos partidarios–, revelando la falta de proyectos para enfrentar los problemas existentes en estas áreas. Estas limitaciones pueden explicarse, en parte, por la convicción de que poco puede hacerse respecto a estas cuestiones, o que lo que puede hacerse no conviene decirlo de antemano. Pero también debe entenderse la dinámica misma del campo político y la competencia entre políticos profesionales, que van definiendo sobre la marcha –aunque los elementos estructurales no estén ausentes– los propios ejes de la discusión.

En los últimos años, los productores profesionales de la oferta política encuentran en asuntos extra-económicos –o sólo indirectamente económicos– temas que reciben atención de la ciudadanía y que, por lo tanto, pueden dar pie a una oferta relativamente rentable. Es cierto que la actual agudización de la crisis ha vuelto a poner a los temas económicos en el centro de la escena.

Pero la experiencia reciente muestra que la centralidad de los temas depende de los cambios en la arena política, en la opinión pública y en la sociedad misma, lo que debería impedir todo diagnóstico fatalista sobre la unidimensionalidad del discurso político y la primacía inevitable de lo económico sobre otros aspectos de la agenda. Claro está que los principales problemas de la sociedad siguen sin resolverse y la mejor calidad de la vida democrática no basta para compensar la crisis del tejido social, la creciente pobreza y la impotencia estatal. Y es esta impotencia estatal la que resulta especialmente crítica, en tanto constituye la principal barrera para iniciar los procesos de reforma social que la situación presente hace necesarios, y contribuye al reflujo general de la acción política. En los últimos veinte años, a medida que el Estado se hacía más impotente, aquellos que peleaban por acceder a él tenían cada vez más dificultades para prometer grandes transformaciones e intervenciones. Y a medida que las promesas se hacían menos creíbles –pero también, en términos relativos, menos demandadas– los políticos comenzaban a desplazarse hacia un terreno de liviandad y limitación en sus producciones discursivas¹³. Lo que constituye, pues, el punto crítico en la producción de una política democrática es el pasaje del plano de los procesos de discusión pública hacia la esfera de la acción estatal, circuito que se retroalimenta de manera tal que aquellas cuestiones que van quedando fuera del alcance efectivo de la acción estatal resultan marginadas y luego eliminadas de la agenda política, aunque a veces permanecen durante más tiempo en la agenda pública.

Una de las maneras en que se produce esta eliminación es su expulsión del terreno de la lucha política, declarando a una cuestión –como entre nosotros la soberanía de Malvinas o, recientemente, la inseguridad– como “cuestión de Estado”: mejor no comprometerse y desprestigiarse prometiendo la solución de aquello que se intuye irresoluble. Esta operación exige a los políticos profesionales de los riesgos de un descrédito aún mayor, que resultaría necesariamente de la acumulación de promesas no cumplidas. Otro mecanismo de censura consiste en declarar que tal cosa –el empleo, el crecimiento, la satisfacción de las necesidades básicas– corresponde a otra esfera de la sociedad, por ejemplo, al mercado: de esta manera se deslindan responsabilidades sobre cuestiones relevantes y los debates se van concentrando en un espacio cada vez más estrecho.

Pero estas dos formas de desentendimiento tienen límites, puesto que los políticos profesionales no pueden reconocer públicamente su impotencia frente a los principales temas de preocupación social: si lo hicieran, podrían ser cuestionadas –como de hecho lo están siendo– sus propias razones de existencia. Por lo tanto, los políticos tienden a situarse en una posición intermedia entre una completa autoimputación de responsabilidades y un completo desentendimiento respecto a los problemas sociales. Así, tienden a fomentar corporativamente –en la medida de lo posible– la creencia de la sociedad en la importancia de las actividades que ellos desarrollan, aunque sin arriesgarse al completo descrédito: justifican, en última instancia, su profesión.

De esta manera, todavía hoy los políticos se ven obligados a tomar posición sobre asuntos que preocupan a la sociedad y que se cree que es su deber

resolver. Aquí el problema es, entonces, qué hacer cuando se logran consensos societales y políticos sobre lo que debe hacerse pero no se cuenta con las herramientas necesarias para llevar adelante proyectos que incluso pueden ser compartidos por las mayorías nacionales. Llegados a este punto, es necesario poner en relación la dinámica cultural y estratégica del campo político, con las capacidades del Estado, que en última instancia es el espacio hacia el que convergen los proyectos que sostienen los actores políticos en pugna. La política y las luchas políticas deben parte de su valor al hecho de que el “botín” que se disputa –el Estado en sus distintos niveles, pero especialmente en el plano nacional– tiene una importancia estratégica: se supone que las posiciones triunfantes en los debates políticos habrán de expresarse en un conjunto de intervenciones estatales capaces de transformar las condiciones iniciales que suscitaron los proyectos de cambio. En efecto, el Estado era el espacio clave en la constitución de las sociedades industriales y más aún de las de América Latina. Pero esta centralidad se fue borrando y, finalmente, el mercado se fue imponiendo como el principal espacio de gestión de la sociedad: de esta manera, se achicaban los márgenes de acción de los actores políticos y de las asociaciones populares frente al poder del capital transnacional.

Por lo tanto, un análisis de los procesos de tematización y producción de sentido como el que aquí he intentado realizar debe necesariamente, luego de indagar sus condiciones institucionales particulares y su medio social específico, encontrar los vínculos entre estos dos niveles de fenómenos y las condiciones histórico-sociales de carácter estructural que constituyen el telón de fondo de toda la escena. La alternativa a este análisis multidimensional es la ingenuidad intelectual y el voluntarismo político.

Bibliografía

- Baudouin, Jean 1998 *Introduction à la sociologie politique* (París: Éditions du Seuil).
- Bourdieu, Pierre 1981 "La représentation. Éléments pour une théorie du champ politique", en *Actes de la Recherche en Sciences Sociales* (París) N° 36-37.
- Bourdieu, Pierre 1997 (1982) *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques* (París: Librairie Arthème Fayard).
- Braud, Philippe 1993 (1991) *El jardín de las delicias democráticas* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Brunner, José Joaquín 1996 "Comunicación y política en la sociedad democrática", en *Contribuciones* (Buenos Aires) N° 2/1996, Konrad-Adenauer-Stiftung A.C., CIEDLA.
- Calvo, Pablo 1999[a] "Cavallo no acepta un acuerdo con Duhalde", diario *Clarín* (Buenos Aires), 1 de Agosto.
- Calvo, Pablo 1999[b] "De la Rúa amenaza con investigar a Duhalde", diario *Clarín* (Buenos Aires), 11 de Septiembre.
- Colombo, Susana 1999 "La oferta de los candidatos", Suplemento Zona, diario *Clarín* (Buenos Aires) 3 de Enero.
- Curran, James 1998 (1996) "Repensar la comunicación de masas" en Curran, James, Morley, David y Valerie Walkerdine *Estudios culturales y comunicación* (Buenos Aires: Paidós).
- diario *Clarín* 1999 "Menem y De la Rúa cruzaron acusaciones por el tema social" (Buenos Aires) 6 de Abril.
- diario *Clarín* 1999 "De la Rúa y Chacho prometen investigar al menemismo" (Buenos Aires) 26 de Agosto.
- diario *Clarín* 1999 "Cavallo, a la ofensiva: «De la Rúa y Duhalde no tienen coraje»" (Buenos Aires) 30 de Septiembre.
- diario *La Nación* 1999 "Criticó De la Rúa la política económica" (Buenos Aires) 5 de Abril.
- diario *La Nación* 1999 "Domingo Cavallo: profundizar las reformas" (Buenos Aires) 11 de Abril.
- diario *La Nación* 1999 "Duhalde propone limitar la apertura económica" (Buenos Aires) 14 de Mayo.
- diario *La Nación* 1999 "Dura polémica entre Duhalde y De la Rúa" (Buenos Aires) 6 de Junio.
- diario *La Nación* 1999 "Responsabilidad legislativa" (Buenos Aires) 1 de Julio.

Eichelbaum, Carlos 1999 “Duhalde se pone cada vez más duro con la Alianza”, diario *Clarín* (Buenos Aires), 30 de Septiembre.

Gaxie, Daniel 1996 (1996) *La démocratie représentative* (París: Montchrestien).

Giddens, Anthony 1998 (1994) *Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales* (Madrid: Cátedra).

Lagroye, Jacques 1989 (1985) “Introduction. Vote et configurations des marchés politiques” en Gaxie, Daniel (director) *Explication du vote. Un bilan des études électorales en France* (París: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques).

Offerlé, Michel 1997 (1987) *Les partis politiques* (París: Presses Universitaires de France).

Rosales, Jorge 1999 “Muestra de madurez del PJ y de la oposición”, diario *La Nación* (Buenos Aires) 30 de Julio.

Santoro, Daniel 1999 “Qué planes ofrecen los candidatos a la gente”, diario *Clarín* (Buenos Aires) 23 de Octubre.

Semán, Ernesto 1999[a] “La convertibilidad, en debate”, diario *Clarín* (Buenos Aires) 6 de Mayo.

Semán, Ernesto 1999[b] “Duhalde y De la Rúa, en el primer cruce por la corrupción”, diario *Clarín* (Buenos Aires) 6 de Junio.

Semán, Ernesto 1999[c] “La Alianza va a pedir que se reconsidere la deuda externa”, diario *Clarín* (Buenos Aires) 25 de Junio.

Velazquez, Jorge Luis 1999 “Promesas del duhaldismo y de la Alianza en Wall Street”, diario *Clarín* (Buenos Aires) 30 de Julio.

Notas

1 La oferta política “está condicionada por las posiciones adquiridas, las configuraciones sociales estructuradas por las asociaciones y los entramados de relaciones, los sistemas de representaciones que condicionan la percepción –más exactamente las percepciones– de lo político; manifiesta los procedimientos de ajuste de las organizaciones a los fenómenos que afectan su imagen, sus prácticas, etc., o a las particularidades durables de las formaciones sociales localizadas” (Lagroye, 1989: p. 330).

2 El Plan de Convertibilidad diseñado por Domingo Cavallo e implementado en 1991 por el gobierno de Menem fijó el tipo de cambio por ley y eliminó la posibilidad de que el Estado tuviera en adelante una política monetaria. Los objetivos eran, además de contener la inflación, abrir la economía y reducir el papel del Estado.

3 Y, en los últimos tiempos, la imagen. Pero esta cuestión excede ampliamente los límites del presente trabajo.

4 El discurso político en un escenario centrípeto tiende a identificar y representar los rasgos centrales de la “conciencia colectiva” (que es siempre el conjunto de sentimientos e ideas comunes a todos los miembros de la sociedad): “los grandes partidos en busca de sufragios en todos los grupos sociales, presentan un discurso que se acerca al menor denominador común de las aspiraciones y expectativas dominantes en la sociedad, en un momento dado” (Braud, 1993: p. 47).

5 “A través de la permanente confrontación de ideas centrales e ideas pobres, análisis originales y estereotipos repetidos, se produce la invención de lo político, es decir, la «producción de lo real» según las lógicas del campo político” (Braud, 1993: p. 235)

6 Usualmente, los estudiosos de estos temas han utilizado conceptos tales como el de “agenda pública” y “agenda política” como sinónimos, mientras otros los han distinguido y otros más han hablado de una pluralidad de agendas. Sin embargo, es posible acordar –más por comodidad lingüística que por diferencias conceptuales de fondo– un uso diferenciado de ambos conceptos, refiriéndonos con “agenda pública” a lo que en términos generales podríamos definir como un conjunto de temas socialmente problematizados en cuya definición y tratamiento intervienen actores diversos –medios, asociaciones civiles, políticos profesionales, técnicos, etc.– y que no remiten directamente a lo que tiene lugar en el espacio estratégico-institucional que denominamos “campo político”. Por consiguiente, sería pertinente reservar la noción de “agenda política” –y eso es lo que haré en este trabajo– al espacio de discurso directamente relacionado con las luchas políticas del campo de los profesionales de la política. La “agenda política” está directamente anclada en los procesos competitivos y opera en ella la lógica de la “oferta” que hemos estado discutiendo. Las formas y contenidos del discurso incluido en la “agenda política” –tanto en lo relativo a los campos semánticos que son puestos en discusión, como al contenido espe-

cífico de estos campos- están filtrados por los mecanismos de “censura” que operan en el campo político (Bourdieu, 1981 y 1997).

7 Presidente del Banco Central durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Machinea habría de convertirse en Ministro de Economía durante los primeros quince meses de la presidencia de Fernando De la Rúa.

8 Sancionada en el Congreso un año antes, con el consenso de todos los bloques partidarios.

9 En los últimos días de agosto, y como respuesta al llamado del candidato aliancista a consensuar políticas de emergencia después del 10 de diciembre, Duhalde realiza un intento más para recuperar el terreno perdido: lanza la convocatoria a la “Concertación ahora” (oficialmente denominada “Concertación para la estabilidad, la producción y el trabajo”), en la que propone un gran acuerdo nacional entre actores políticos y sociales, orientado a la implementación conjunta de medidas de emergencia que permitan superar la crisis recesiva. Entre estas medidas hay reducciones impositivas, fomento del “compre nacional”, suspensión de los despidos por un año y refinanciación de las deudas de los sectores productivos (diario *Clarín*, 26 y 31 de Agosto de 1999).

10 En general, la disputa entre Cavallo y Duhalde fue poco intensa. Ambos contendientes mantuvieron las aspiraciones de un acuerdo electoral hasta último momento. Aun cuando concurrieron por separado a las elecciones del 24 de octubre, nunca desapareció el acuerdo tácito de que se apoyarían mutuamente en el caso de una segunda vuelta.

11 La discusión sobre la relación entre medios de comunicación, producción de la realidad y dominación política se impone directamente como producto de esta investigación. De hecho, el objeto específico de mi estudio podría ampliarse y enriquecerse si, saliendo del estrecho espacio de la lucha política y la interacción entre políticos, introduyéramos como variable de análisis el papel de los medios de comunicación. Puesto que esto excede los límites de lo que me he propuesto, quien esté interesado en estas cuestiones puede encontrar una reconstrucción crítica de la discusión sobre el tema en Curran, 1998. Una discusión específica sobre América Latina se encuentra en Brunner, 1996.

12 Aun cuando la idea de “construir la realidad” pueda resultar excesivamente idealista, se trata por el contrario de un acto productivo de los agentes humanos a través de su intervención práctica en el mundo. Esta intervención es simbólica, sea la palabra o el cuerpo su medio de expresión. Por lo demás, construir la realidad significa “reforzar simbólicamente la propensión sistemática a privilegiar ciertos aspectos de lo real e ignorar otros” (Bourdieu, 1997: p. 160). Y en ello la contribución de la palabra política es altamente significativa.

13 De todas maneras, el presente trabajo intenta mostrar que, con las dificultades del caso, los políticos profesionales se enfrentan a un conjunto de problemas a los que deben dar respuesta, y que sus respuestas son só-

lo unas pocas entre las infinitas posibles *in abstracto*. La complejidad de los intercambios simbólicos en la política argentina tal vez no sea visible para los ensayistas que rápidamente dictaminan sobre la primacía de la imagen en la época contemporánea y que, desde posiciones elitistas, lamentan la pobreza de la discusión pública y la cultura política de nuestro país. Pero he intentado mostrar que, con límites notables en su alcance, la complejidad y variabilidad existen en este espacio de la vida social.